

Cuestiones acerca de las inscripciones y anotaciones en el Registro General de la Propiedad Intelectual: Especial consideración sobre las anotaciones preventivas

por

JORGE ORTEGA DOMÉNECH
Profesor Titular Interino UCM. Abogado

SUMARIO

- I. LA NUEVA REGULACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
- II. INSCRIPCIÓN Y ANOTACIÓN: IDEAS GENERALES:
 1. CLASES DE ASIENTOS Y ESTRUCTURA DE LOS MISMOS.
 2. EL CONTENIDO DE LOS ASIENTOS Y LAS NOTAS MARGINALES.
 3. ORDENACIÓN DE LOS ASIENTOS.
- III. LA INSCRIPCIÓN DE LA HIPOTECA EN NOTA MARGINAL.
- IV. UN CASO ESPECIAL DE INSCRIPCIÓN DE LA OBRA EN COLABORACIÓN: LA OBRA CINEMATOGRAFICA:
 1. PRIMER SUPUESTO: LA INSCRIPCIÓN DE LA OBRA CINEMATOGRAFICA COMO TAL.
 2. SEGUNDO SUPUESTO: LAS DENOMINADAS «MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN» POR LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
- V. INSCRIPCIÓN DE DOS TÍTULOS SEMEJANTES DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
- VI. LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS:
 1. CONCEPTO.
 2. INCLUSIÓN DE LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS EN EL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

3. CARACTERÍSTICAS.
4. PRÁCTICA DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA.
5. LOS SUPUESTOS DE ANOTACIÓN PREVENTIVA ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO 2003.
6. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS EN EL TÍTULO.
7. RECURSO CONTRA LA CALIFICACIÓN DEL REGISTRADOR.
8. CONVERSIÓN DE LA ANOTACIÓN EN INSCRIPCIÓN.
9. CONTENIDO DE LAS ANOTACIONES.
10. NULIDAD DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA.
11. CANCELACIÓN DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA.

I. LA NUEVA REGULACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

El Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual (*BOE* 75/2003, de 28 de marzo), ha supuesto el culmen de la descentralización de dicho Registro, proceso iniciado en el antiguo Reglamento de 1993, puesto que el anterior de 1991 continuaba con el modelo de régimen centralizado y oficinas provinciales (1).

En la actualidad, como resultado de la mencionada descentralización, coexisten en el territorio nacional diez Registros Territoriales establecidos y gestionados por las Comunidades Autónomas. Las restantes siete comunidades disponen de Oficinas dependientes del Registro Central, a modo de sucursales, continuando con el modelo existente con anterioridad al Reglamento de 1993.

Pero, además de este importante proceso descentralizador del Registro, el actual Reglamento de 2003 ha supuesto el establecimiento de una vez por todas de un procedimiento único, necesario para terminar con la problemática situación provocada por la existencia de diversos Registros autonómicos con su propia regulación. El artículo 144 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual organiza el sistema como un Registro Único, mientras que su artículo 145 LPI establece el registro de derechos relativos a la propiedad intelectual (2). Precisamente el punto que nos interesa tratar y que más problemas presenta por la indefinición o falta de una sistemática eficiente a la hora de establecer remisiones a otros cuerpos legales, en especial a la legislación hipotecaria.

(1) No olvidemos que, en un primer momento, el Registro tenía *carácter único* para toda la nación y se componía de una Oficina Central o Registro General, así como de tantas Secciones u Oficinas de presentación como provincias (LPI 1879, art. 3.º; Reglamento de 1880, art. 28; RRDD 2256/1977, de 27 de agosto, art. 6.º; Orden de 31 de enero de 1978, art. 8.8).

(2) Dicha unidad se consigue, no a través de su propia estructura y organización, sino con el respeto de los diferentes Registros Territoriales autónomos hacia la reglamentación común en las normas de procedimiento administrativo y de coordinación e información (art. 2 del Reglamento de 2003).

II. INSCRIPCIÓN Y ANOTACIÓN: IDEAS GENERALES

En un sentido estricto, la *inscripción* equivale a la toma de razón, en algún registro, de los documentos o las declaraciones que han de asentarse en él según las leyes, tal y como reza una de las definiciones ofrecidas por el diccionario de la Real Academia.

En un sentido amplio, *inscripción* equivale a *asiento registral*, configurándose este último como la constatación o expresión formal y solemne, hecha en los Libros del Registro de la Propiedad Intelectual, de los derechos relativos a las obras, actuaciones o producciones protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual, así como de los actos y contratos de constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales y de cualesquiera otros hechos, actos y títulos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a tales derechos inscribibles (en concordancia con el art. 1.º del vigente Reglamento de Propiedad Intelectual de 2003).

Si bien partimos de una identificación de ambos conceptos por parte de la doctrina sobre registro inmobiliario, sin embargo tal afirmación no se produce en la realidad registral, ya sea la inmobiliaria ya la de propiedad intelectual.

De hecho, en un solo asiento podemos encontrar diversas constataciones registrales, al tener acceso al Registro en un único documento varios actos inscribibles. Cada hecho o acto que se produce en relación con la obra intelectual da lugar a su propia *inscripción*, aunque de manera formal todos y cada uno de ellos se recoja bajo el mismo asiento (así, sobre una misma obra puede recaer la constitución de una hipoteca mobiliaria, una cesión de derechos de explotación y hasta una licencia contractual para un determinado uso) (3).

Esta equivalencia la encontramos relacionando dos artículos del Reglamento: el 26, primero, y luego el 7.

El párrafo primero del artículo 26 establece que las inscripciones se ajustarán en su forma al modelo que apruebe la Comisión de Coordinación de los Registros, para indicar, acto seguido, los datos a incluir en cada inscripción. Pero sobre todo, en sus dos últimos párrafos:

«4. Se asignarán números diferentes y correlativos a cada obra, actuación o producción que se presente para inscripción, dentro de cada año natural.

(3) La idea resulta bastante clara y asentada. Al efecto recogemos como ejemplo una Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 7 de julio de 1954 que, aunque referida a un inmueble, es aplicable también a la obra intelectual: «A veces las escrituras o títulos presentados a inscripción contienen dos o más actos inscribibles relativos a las mismas fincas, como sucedió en el caso debatido, en el que se formaron nuevas entidades hipotecarias, se constituyeron determinadas servidumbres de paso y se practicó conjuntamente la inscripción en un solo asiento».

Si hubiese números anulados u omitidos, se salvarán al diligenciarse los libros correspondientes.

Las sucesivas inscripciones de derechos sobre una obra, actuación o producción estarán diferenciadas con ordinales correlativos a partir de la primera.

5. Todas las inscripciones contendrán, asimismo, el sello del registro territorial competente y la firma del registrador».

Evidentemente, todas las inscripciones se realizan en los correspondientes asientos registrales, de ahí la confusión, más práctica que terminológica, como demuestra la redacción del párrafo primero del artículo 7 al decir que «*los asientos se practicarán en libros, cuerpos o soportes apropiados para recoger y expresar de modo indubitado, con adecuada garantía jurídica, seguridad de conservación y facilidad de acceso y comprensión, todos los datos que deban constar en el Registro*». Es decir, como hemos señalado, el asiento se configura a la vez como inscripción y como soporte material de la misma. La propia definición de la Real Academia se refiere incluso al asiento cuando habla del concepto «asentarse», es decir, incorporar la inscripción a un soporte material.

El problema que se nos plantea con el actual Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual reside en la falta de regulación expresa acerca, no del contenido de las inscripciones —tratado con enorme detalle—, sino de los tipos de inscripciones y asientos registrales que pueden existir.

Y aquí empiezan las dificultades, por cuanto la construcción de esta materia debe realizarse remitiéndonos analógicamente a otras normas como las relativas al Reglamento del Registro Mercantil y la Ley y Reglamento de la Legislación Hipotecaria, lo cual resulta complicado en determinadas ocasiones, pues la analogía no sirve siempre para cubrir las lagunas de ley, por lo que parece más efectivo la creación de normativa propia partiendo de ese origen común.

1. CLASES DE ASIENTOS Y ESTRUCTURA DE LOS MISMOS

En los Libros del Registro se llevará a cabo la práctica de los asientos de presentación, inscripciones extensas o concisas, principales y de referencia, anotaciones preventivas, cancelaciones y notas marginales, siguiendo el modelo creado por el artículo 41 del Reglamento Hipotecario. En términos parecidos, sin distinguir expresamente las clases de inscripciones, se pronuncia el artículo 33 del Reglamento del Registro Mercantil.

Teniendo en cuenta la sistemática del Registro bastaría con dos tipos de asientos:

- Asientos de presentación: actúan como tales las solicitudes presentadas por los interesados.
- Asientos de inscripción o inscripciones propiamente dichas: donde se recogen todos los datos relativos a las obras y derechos inscritos en el propio Registro.

De la redacción del artículo 23.1 del vigente Reglamento 2003 se deduce que el primer asiento es uno de «Titularidad» (la «primera inscripción» a que se refiere la redacción legal), con el sentido más amplio posible de dicho concepto, tal y como desarrollamos en el siguiente apartado en relación con el contenido de los asientos registrales y la consiguiente inscripción de las obras, actuaciones y producciones, así como de los derechos patrimoniales relativos a las mismas.

En cuanto a su estructura, viene detalladamente recogida en el artículo 26.2 del Reglamento 2003:

- A) Número de asiento registral.
- B) Título de la obra, actuación o producción.
- C) Objeto de la propiedad intelectual.
- D) Clase de obra, actuación o producción con los datos específicos de descripción o identificación que constan en la solicitud (breve resumen acerca de su contenido).
- E) Datos identificativos del autor o titular originario (Apellidos, Nombre, Nacionalidad y DNI).
- F) Los derechos que se inscriben, su extensión y condiciones si las hubiera.
- G) Titular de los derechos patrimoniales con expresión de sus datos identificativos.
- H) El título que contiene el derecho que se inscribe, su fecha y el tribunal, juzgado o notario que lo autorice, en su caso.
- I) Lugar, fecha, hora y minuto de presentación de la solicitud de inscripción.
- J) Número de entrada que se le hubiese asignado (denominada «Núm. solicitud»).
- K) Fecha a partir de la cual la inscripción comienza a surtir efectos.

La mecánica de la inscripción se completa con la firma del Registrador y el sello del Registro (4).

(4) Artículo 26.5 del Reglamento de 2003: «*Todas las inscripciones contendrán, asimismo, el sello del Registro Territorial competente y la firma del Registrador*». En este sentido, el artículo 33.2 RRM indica que los Registradores autorizarán con su firma los asientos y las notas al pie del título.

2. EL CONTENIDO DE LOS ASIENTOS Y LAS NOTAS MARGINALES

El Registrador, según el artículo 374 RH, se ajustará, en lo posible, para la redacción de los asientos, notas y certificaciones, a las instrucciones y modelos oficiales.

Mención especial merecen las «notas marginales». Se trata de anotaciones al margen de los asientos de inscripción, mediante las cuales se consignan determinados hechos, derechos, circunstancias, advertencias y referencias varias. Tienen cierta relación de dependencia con el asiento a cuyo margen se practican (aunque, de momento, en el Registro de la Propiedad Intelectual no se siga el mismo sistema formal del «margen» que en el Registro de la Propiedad, aunque el fondo es el mismo). Pueden suponer desde la simple referencia a otra inscripción o asiento como la modificación, gravamen, determinación o negación del contenido del asiento principal al que afectan. En principio, son *numerus clausus*, y sólo pueden practicarse las previstas en la Ley, aunque la misma no establece una regla general sino que regula casos concretos y específicos. Podemos señalar algunos ejemplos prácticos mediante la siguiente clasificación:

1. *Notas marginales de modificación jurídica*. Dan fe de un evento jurídico: un hecho, la celebración de un negocio jurídico, una declaración de voluntad, una manifestación de la autoridad administrativa o judicial. Por ejemplo, el cumplimiento de una condición suspensiva en relación con un derecho de explotación.
2. *Notas sucedáneas de asientos principales*. Recogen contenidos que, aunque deberían revestir la forma de inscripción, sin embargo por ley se les reserva esta forma de nota marginal. Su eficacia se configura como la propia del asiento al que viene a sustituir. Por ejemplo, cuando un título adolece de un defecto subsanable puede extenderse nota marginal preventiva del mismo (5).
3. *Notas marginales de oficina*. Se establecen legalmente para la mejor relación y coordinación de unos asientos con otros de una manera breve, sin tener valor material y practicándose de oficio por el Registrador. Por ejemplo, las extendidas en casos de agrupamiento y segregación de obras y las notas al margen de asientos cancelados.

El Registro de la Propiedad Intelectual no dispone al efecto de ningún tipo especial de instrucción para la redacción de los asientos y notas marginales, pero sería conveniente, en aras de la claridad, la redacción de los

(5) En este supuesto, y siguiendo el artículo 163 RH, las notas marginales preventivas caducarán a los sesenta días de su fecha. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta ciento ochenta días por justa causa y en virtud de providencia judicial.

diferentes asientos imitando el modelo del Registro de la Propiedad: es decir, con tres columnas distribuidas de la siguiente manera:

- a) Notas marginales: donde se recogen las diferentes vicisitudes que afectan a la obra o derecho inscrito, tales como las anotaciones relativas a defectos subsanables o insubsanables, el agrupamiento o segregación de obras, las anotaciones preventivas, así como las cancelaciones, suspensiones o caducidad del asiento en cuestión.
- b) Número de asiento o inscripción.
- c) Asiento de presentación: se recoge una breve descripción de la obra o derecho inscrito más la firma del Registrador (aquí también podrían inscribirse las anotaciones preventivas y sus cancelaciones, con nota concisa al margen).

Por otra parte, y en relación con la redacción de los asientos y las notas marginales, debemos tener en cuenta, además, una serie de precisiones importantes (6):

- a) Los asientos del Registro se redactarán en lengua castellana, según los modelos oficiales aprobados y, en su caso, posibles instrucciones impartidas tanto por el Registro Central, como la Comisión de Coordinación, como por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
- b) Los conceptos de especial interés en la descripción de la obra o derecho podrán destacarse mediante subrayado, diferente tipo de letra, empleo de tinta de distinto color o cualquier otro medio que permite la diferenciación.
- c) Si en los asientos o notas marginales deben hacerse constar datos o circunstancias idénticos a los que aparecen en otros asientos o notas, los mismos podrán omitirse haciendo una remisión a los practicados con anterioridad, sin necesidad de hacerlos constar de nuevo.
- d) Dentro de cada asiento, los espacios o líneas que queden en blanco pueden inutilizarse con una raya (por cuanto la manera de redactar los asientos de propiedad intelectual son diferentes a los del Registro Mercantil, el cual establece dicha posibilidad como una obligación).

3. ORDENACIÓN DE LOS ASIENTOS

Como ya hemos avanzado anteriormente, los asientos correspondientes a cada obra o derecho inscrito se numeran correlativamente por riguroso orden de inscripción, y en ello sigue al artículo 372 RH.

(6) Por aplicación analógica del artículo 36 RRM.

Con respecto a las notas marginales, se dispone en el mencionado precepto que se señalarán con letras por riguroso orden alfabético. En este último aspecto no se sigue la regulación inmobiliaria, aunque podría resultar conveniente realizar tal distinción entre el asiento o inscripción principal y la nota marginal, ya sea mediante letras o bien con una numeración distinta. En caso de agotarse las letras del alfabeto se volverá a comenzar por la primera duplicada, siguiendo de esta manera en todas las demás.

Para las anotaciones preventivas y sus cancelaciones se seguirá el mismo sistema que para las notas marginales. Tales anotaciones podrán venir incluidas concisamente en estas últimas, o bien en el propio cuerpo de la inscripción, aclarando el tipo de anotación, así como su descripción y contenido, además de la indicación a la documentación presentada al efecto.

Por otra parte, el derogado Reglamento 1993 recogía expresamente la división en Secciones del Registro, tema completamente olvidado por el actual, y que continúa siendo de aplicación, por cuanto la configuración del Registro se llevó a cabo mediante aquel sistema. En concreto, según su artículo 7, tanto el Registro Central como cada uno de los Registros territoriales ordenarán su documentación y soportes de información en Secciones, dependiendo de la clase de obra, actuaciones o producciones objeto de derechos de propiedad intelectual (7).

III. LA INSCRIPCIÓN DE LA HIPOTECA MOBILIARIA EN NOTA MARGINAL

Se supone que se entiende suficiente con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Hipoteca Mobiliaria, de 16 de diciembre de 1954, es decir: inscripción constitutiva en el Registro especial de gravámenes y comunicación de oficio

(7) Dichas Secciones son las siguientes: Sección I: los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza, con excepción de las incluidas en la sección III. Sección II: las composiciones musicales, con o sin letra. Sección III: las obras dramáticas, dramático-musicales, coreografías, pantomimas y, en general, las obras teatrales. Sección IV: las obras cinematográficas y audiovisuales. Sección V: las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos, cómics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas, y las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. Sección VI: los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras de arquitectura o ingeniería, así como los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y la ciencia. Sección VII: los programas de ordenador. Sección VIII: las actuaciones de artistas-intérpretes o ejecutantes. Sección IX: las producciones fonográficas. Sección X: la producción de grabaciones audiovisuales. Sección XI: las meras fotografías. Sección XII: las producciones editoriales previstas en el artículo 129 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual.

al Registro de la Propiedad Intelectual para hacer constar, mediante anotación, la constitución del gravamen. Si bien la omisión de dicha anotación no altera la eficacia de la citada hipoteca (8).

La Ley de Propiedad Intelectual de 1879 ya se refería expresamente a este derecho aunque simplemente para remitirse a la mencionada Ley Hipotecaria, a la que dejaba la regulación de la materia en cuestión, sin entrar a regular siquiera los más básicos detalles.

El mencionado precepto de la Ley de Hipoteca Mobiliaria se completa con lo establecido en el artículo 26 de su Reglamento, destacando el mismo que al comunicar la constitución de la hipoteca al Registro de la Propiedad Intelectual (considerado tanto por la Ley como por el Reglamento como un «Registro especial»), el documento incluirá tanto la expresión de los nombres y apellidos del deudor y del acreedor, como el bien hipotecado, la obligación asegurada y, finalmente, la fecha y el Notario autorizante de la escritura pública.

El artículo añade otros dos aspectos: la referida comunicación también se llevará a cabo en el momento de cancelación de la hipoteca, y el oficio de contestación del Registro de la Propiedad Intelectual se archivará por el registrador del Registro de Bienes Muebles en legajos de los de su clase, por orden correspondiente de fechas.

Al igual que en el Registro de la Propiedad Intelectual con la inscripción de los hechos, actos y contratos sobre la obra intelectual, la inscripción de la escritura de constitución de hipoteca da lugar a que se destine a cada obra intelectual hipotecada un asiento separado y especial, en folio independiente, apareciendo todos los asientos relativos a dicha obra, mientras no tenga lugar la cancelación de la hipoteca y otros gravámenes, bajo un solo número, a continuación unos de otros, sin solución de continuidad.

En el momento de la cancelación de todos los gravámenes existentes, se extinguirá el número y se cerrará el folio, quedando registrada la obra únicamente en el Registro de la Propiedad Intelectual, como tal obra, con todos los derechos de explotación de terceros que existiesen sobre la misma en su caso, hasta el momento de su paso al dominio público.

(8) *«La hipoteca que se constituyere sobre automóviles u otros vehículos de motor, vagones, tranvías, propiedad intelectual, propiedad industrial, aeronaves y maquinaria industrial, será comunicada de oficio por los Registradores de la Propiedad o Mercantiles, una vez inscrita a los jefes o encargados de los Registros especiales, quienes acusarán recibo y verificarán las anotaciones que correspondan.*

La falta de toma de razón en los Registros especiales no alterará en ningún caso los efectos de la inscripción en el Libro de Hipoteca Mobiliaria».

IV. UN CASO ESPECIAL DE INSCRIPCIÓN DE LA OBRA EN COLABORACIÓN: LA OBRA CINEMATOGRAFICA

1. PRIMER SUPUESTO: LA INSCRIPCIÓN DE LA OBRA CINEMATOGRAFICA COMO TAL

La cuestión principal que gira en torno a la inscripción de la obra cinematográfica (ejemplo claro de obra en colaboración) es si la misma se inscribe en su conjunto o cada aportación de los autores que intervienen en su creación por separado. De la deficiente redacción del articulado de la Ley de Propiedad Intelectual y el Reglamento del Registro, nos encontramos con la siguiente situación:

- el artículo 7 de la LPI establece que para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores y que los mismos podrán explotar separadamente sus aportaciones, salvo que causen perjuicio a la explotación común;
- el artículo 87 de la LPI reconoce como autores de la obra cinematográfica al director-realizador, los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos y los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra;
- el artículo 14 del Reglamento del Registro nos dice en su apartado d), número 3, que *«si el productor fuese el único autor en los términos previstos en el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, se acompañará la declaración del productor en la que así se haga constar»*.

Cuando la inscripción se presenta por un solo autor o titular de derechos no existen problemas. Los mismos aparecen en el momento en que se intenta inscribir una obra cinematográfica, al no establecerse expresamente ni en la Ley ni en el Reglamento quién debe solicitar su inscripción ni los requisitos especiales de tal solicitud.

La solución más acorde con la actual redacción legal y con la lógica se articularía de la siguiente manera:

- según el artículo 11 del Reglamento del Registro, pueden solicitar la inscripción de la obra los autores y demás titulares originarios de derechos de propiedad intelectual. Teniendo esto en cuenta, en la obra cinematográfica cada uno de los coautores intervinientes en la realización del conjunto disfruta de los derechos originarios sobre su propia aportación, por lo que todos tienen derecho a solicitar la obra en su conjunto;

- si en el artículo 14.d) 3.º se permite al productor (con una asimilación a la autoría que resulta del todo inapropiada, por cuanto lo comparan con los verdaderos autores del art. 87 LPI) la solicitud en solitario de la inscripción, la respuesta debe ser que cualquiera de los autores indicados en el artículo 87 LPI (y sólo estos, por ser los reconocidos como tales por la Ley) podrá solicitarla igualmente por separado (9);
- ahora bien, como el artículo 7 LPI requiere el consentimiento expreso de todos los coautores en relación con la divulgación y explotación en general de la obra, quien solicite en solitario la inscripción deberá aportar un documento de autorización por parte de los demás autores, o bien el contrato de producción donde aparezcan los nombres de los autores del artículo 87 LPI que realmente participan en la proyección de la película. En caso contrario, no se podrá practicar la inscripción hasta que se subsane tal extremo;
- la inscripción de la obra cinematográfica en su conjunto no impide que cada coautor inscriba su aportación por separado, siempre que no perjudique la explotación común, según establece el artículo 7 LPI.

Posiblemente, los problemas terminen con la previsión recogida en el «Proyecto de Ley de Cine» aprobada por el Congreso el 5 de junio de 2007, concretamente en su Disposición Adicional Cuarta, según la cual, *«se crea una sección adicional en el Registro de Bienes Muebles destinada a la inscripción, con eficacia frente a terceros, de las obras y grabaciones audiovisuales, sus derechos de explotación y, en su caso, de las anotaciones de demanda, embargos, cargas, limitaciones de disponer, hipotecas, y otros derechos reales impuestos sobre las mismas, en la forma que se determine reglamentariamente»*.

Semejante previsión supondría eliminar el problema de la inscripción de obras cinematográficas para el Registro Territorial, pero no se dispone nada acerca de la supresión de su inscripción en este último en Proyecto. Cuando menos hubiese sido interesante, por cuanto habría dejado simplemente la inscripción de las aportaciones individuales de cada coautor en el Registro de la Propiedad Intelectual (como obras musicales, literarias —guión y argumento—, etc.). A falta de todo ello, se echa de menos una modificación del Reglamento de 2003, estableciendo las peculiaridades propias de la inscripción de la obra cinematográfica, sobre todo en cuanto a la legitimación para solicitarla y el tipo de documentación probatoria de tal extremo exigida por el Registrador.

(9) Aquí debemos dejar constancia que en el Proyecto de Ley del Cine aprobado por el Congreso el 5 de junio de 2007 se incluye también como autor de la obra cinematográfica al «director de fotografía». Pero hasta el momento en que no se apruebe finalmente la Ley no tendrá dicha cualidad y de momento no puede solicitar la inscripción de la obra.

2. SEGUNDO SUPUESTO: LAS DENOMINADAS «MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN» POR LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El artículo 90 LPI establece que la remuneración de los autores de la obra audiovisual por la cesión de los derechos mencionados en el artículo 88 de dicho cuerpo legal deberá *determinarse «para cada una de las modalidades de explotación concedidas»*. Con anterioridad, el artículo 57, en sede de derechos patrimoniales, establece que la transmisión de derechos de autor para su explotación a través de las modalidades de *edición, representación o ejecución, o de producción de obras audiovisuales*, se regirá por lo establecido en el Libro I. Esta regulación legal merece una serie de consideraciones al respecto:

1. La Ley de Propiedad Intelectual habla indistinta y confusamente en su articulado de «derechos de explotación» y de «modalidades de explotación», cuando se refiere a lo mismo, es decir, los cuatro tipos de derechos de explotación recogidos en el artículo 17: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. A los mismos se podría añadir una especie de «explotación derivada» (léase *merchandising*), es decir, obtención de ingresos a través de la venta de diversos objetos relacionados con la película (muñecos, ropa de hogar, cristalería, posters, etc.), puesto que no encaja bien en ninguno de los cuatro tipos indicados.
Por tanto, las modalidades señaladas en el artículo 57 LPI se integran dentro de alguno de los cuatro tipos de derechos de explotación encuadrados en el artículo 17 LPI.
2. La «determinación», a la que se refiere el artículo 90 LPI, quiere decir que en documento separado se establecerá el derecho a recibir las remuneraciones indicadas en el precepto, pero no supone, en modo alguno, la obligación de establecer con exactitud ni el montante ni el porcentaje exacto, lo que a veces resulta imposible por cuanto se desconoce en ese momento el éxito que tendrá la película. Bastaría con una cláusula genérica en el sentido de prever la posibilidad de un acuerdo posterior entre las partes para determinar el montante final a la vista de los beneficios reales obtenidos (de esta forma no podría denegarse la inscripción, como defiende una buena parte de la doctrina).

V. INSCRIPCIÓN DE DOS TÍTULOS SEMEJANTES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En la Ley de 1879 y en su Reglamento se apuntaban una serie de criterios para encontrar una solución, pero en la actualidad los mismos se han complicado:

- En el Registro de la Propiedad Intelectual se inscriben obras, actuaciones o producciones literarias, artísticas o científicas, pero no nos encontramos ante un Registro de «nombres» o «marcas», propios del Registro Civil, el Registro de Patentes y Marcas o el Registro de Sociedades, entre otros. Asimismo, tampoco se trata de un Registro de «ideas».
- El «título» de una obra intelectual, aparte de configurarse como uno de los datos que aparecen en la inscripción de la misma, constituía en la legislación derogada, junto al plan y el argumento, la propiedad para quien hubiese concebido o adquirido la obra (art. 64 del Reglamento de 1880).

Por tanto, se consideraba fraudulento emitir dichos «títulos» de manera que pudieran confundirse el nuevo con el más antiguo, según el prudente juicio de los tribunales, aparte de las sanciones derivadas del Código Penal (arts. 46 y 47.3 de la Ley de 1879).

Dicha normativa daba lugar a que el tema de la admisión de títulos iguales sobre obras distintas resultase fácil: si el título era parte integrante de la obra, ante un título semejante habría que rechazar la inscripción registral. Pero la existencia de nombres comunes o en el dominio público volvía a plantear el problema: «agua», «cielo», «arena», «playa», «sol»..., utilizables por cualquier persona para cualquier tipo de obra intelectual registrable. Denegar, sin embargo, la inscripción de tales términos en distintas obras carecería de sentido al no disponer de válidos argumentos de oposición tanto jurídicos como jurisprudenciales.

Todo aquello que puede provocar «confusión» sobre la que se apoya otro supuesto autor para solicitar la inscripción debe ser rechazado por el Registro (por ejemplo, llegando a casos muy notorios, un nuevo «Quijote de La Mancha»), derivado tanto de la consulta de los asientos registrales existentes como del propio conocimiento personal del Registrador sobre obras existentes en el mercado.

El tema de la originalidad de la obra, reclamado expresamente por el artículo 10 LPI, ha tenido desde su inclusión en el texto legal una doble proyección:

- evitar el plagio (dejando aparte que un mismo hecho o idea pueden contarse de maneras diversas);

- proporcionar una protección distinta a obras que no son originales: traducciones, adaptaciones, modificaciones, revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, resúmenes, extractos, arreglos musicales y cualesquiera transformaciones de una obra (recogidas en el art. 11 LPI).

Sin embargo, también se ha extendido la «originalidad» del contenido de la obra a su «título», pues el artículo 10.2 LPI señala que *«el título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella»*. La redacción resulta confusa, por cuanto no queda claro si el concepto de originalidad se sigue refiriendo igualmente al contenido de la obra o también a su título. Parece más bien que se refiere a la originalidad del propio título de la obra, dado que no tiene sentido hacer depender la originalidad del título de la originalidad de la obra, pues la inexistencia de la segunda no produce automáticamente la inexistencia de la primera.

Si bien repetimos que el estudio de la posible originalidad o no de la obra no es tarea propia del Registrador, resulta evidente en cuanto a la protección del título lo siguiente:

- no pueden ser «títulos originales» los consistentes en palabras comunes, genéricas, necesarias o usuales en relación con el tipo de obra de que se trate;
- no pueden ser tampoco originales los constituidos exclusivamente por nombres de personajes históricos, histórico-dramáticos, literarios, mitológicos o de personalidades vivas;
- no se puede confundir la originalidad del título con la forma gráfica que se le dé al mismo;
- la protección del título, con independencia de la originalidad, viene claramente recogida en el vigente Reglamento de 1880, concretamente en su artículo 64, cuyo primer párrafo dice que *«el plan y argumento de una obra dramática o musical, así como el título, constituyen propiedad para el que los ha concebido o para el que haya adquirido la obra»*; señalando a continuación el párrafo segundo que *«en su consecuencia se castigará como defraudación el hecho de tomar en todo o en parte de una obra literaria o musical manuscrita o impresa, el título, el argumento o el texto para aplicarlos a otra obra dramática»*.

El artículo, teniendo en cuenta la necesaria actualización del Reglamento, resulta perfectamente aplicable al título otorgado por el autor a cualquier tipo de obra intelectual.

Al respecto, los problemas actuales con los que se encuentra el Registro Territorial de Madrid son los siguientes:

1. La ausencia de unos «Índices Generales de Obras» en el propio Registro Central, lo que supone una dificultad añadida a la hora de perseguir el fraude entre obras y títulos inscritos, pues la averiguación con respecto a obras «no inscritas» resulta de todo punto imposible o meramente casual. Por tanto, el Registrador Territorial de Madrid deberá actuar dentro de las posibilidades de consulta que le ofrecen sus propios asientos registrales y las posibilidades de comunicación con los otros nueve Registros Territoriales, así como con los siete dependientes todavía del Registro Central.
2. La imposibilidad de averiguación de la existencia de una solicitud de inscripción de obra o título idénticos en cualquier otro Registro Territorial, pues el sistema actual de momento sólo permite conocer lo que se encuentra ya inscrito en dichos organismos.

En todo caso, el vigente Reglamento permite al Registrador actuar de oficio en el caso de existir dos o más solicitudes incompatibles (art. 20.1).

VI. LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS

1. CONCEPTO

Se trata de un asiento de menor solemnidad y más simple que la inscripción, con efectos legales más reducidos y con una duración legal determinada.

2. INCLUSIÓN DE LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS EN EL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

El Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre, dedica por primera vez una parte de su articulado a las anotaciones preventivas, concretamente en los artículos 37 y 38:

«Artículo 37. Podrá pedir anotación preventiva de su derecho:

1. El que obtenga a su favor mandamiento judicial ordenando la anotación preventiva de demanda sobre la titularidad de derechos de propiedad intelectual o la constitución, declaración, modificación o extinción de los mismos.
2. El que obtuviera a su favor un mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en derecho de propiedad intelectual del deudor.
3. El que obtuviera sentencia ejecutoria que, previo los trámites procesales establecidos, pueda hacerse efectiva sobre derechos de propiedad intelectual.
4. El que expresamente estuviera autorizado».

«Artículo 38. 1. Las anotaciones preventivas se extinguen por su cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción. La extinción de las anotaciones preventivas puede ser total o parcial. 2. Los plazos de caducidad de las anotaciones preventivas y el procedimiento para su cancelación se regularán por lo establecido en la legislación hipotecaria».

3. CARACTERÍSTICAS

Cada anotación preventiva responde a finalidades de muy diversa índole, como veremos de la propia redacción del Reglamento actual, por lo que tienen escasas características comunes. De todas maneras, se puede afirmar que las características más importantes de este tipo de anotaciones son las siguientes:

- a) *Transitoriedad y pendencia*: supone la caducidad del propio asiento. Mientras la inscripción tiene vocación de perdurabilidad, en cambio la anotación preventiva resulta en todo caso temporal. Aunque puede darse el supuesto también de que el derecho anotado no sea temporal (por ejemplo, una demanda de propiedad sobre la obra por el verdadero autor o dueño), y que la inscripción arrope un derecho perentorio (por ejemplo, la inscripción del usufructo de los derechos de explotación).
- b) *Inscripción de derechos reales no documentados*: como luego examinaremos, la regulación de las anotaciones preventivas se remite a lo dispuesto en la vigente Ley Hipotecaria, según la cual se inscriben en el Registro de la Propiedad derechos reales debidamente documentados, al igual que se lleva a cabo la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual en relación con los derechos económicos y morales sobre las obras, que también deben partir de una válida documentación.

Por tanto, partiendo de la idea establecida en la Ley Hipotecaria, y aplicándola al Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual, las anotaciones preventivas se refieren a los siguientes tipos de derechos sobre la obra intelectual:

- derechos sobre las obras intelectuales no documentados,
- derechos que se constituyen con la propia anotación (por ejemplo, la anotación de un embargo),
- derechos en formación o en litigio (por ejemplo, una demanda interpuesta por el presunto verdadero titular de los derechos en cuestión sobre la obra),

- derechos que afectan a la obra sin entidad suficiente para ser inscritos, debido a su falta de concreción sobre la misma (por ejemplo, los derechos hereditarios) o a otra causa.
- c) *Accesoriedad*: si bien todos los asientos del Registro, menos el primero, se encuentran conectados a otro anterior, sin embargo las anotaciones preventivas se comunican o conectan con el propio asiento al que afectan y sólo a él. En el momento en que se cumple la finalidad que origina su inclusión registral desaparecen (por ejemplo, la ejecución del embargo sobre derechos de explotación).
- d) *Eficacia negativa*: la eficacia misma de las anotaciones preventivas resulta negativa, pues limitan o suspenden los efectos propios de publicidad del Registro, impidiendo que cualquier tercero de buena fe con derechos sobre la obra pueda invocar la eficacia del Registro en tanto en cuanto no se resuelva de un modo u otro la limitación establecida en la propia anotación (por ejemplo, en caso de anotación preventiva de una demanda de reclamación de derechos sobre la obra por persona distinta tanto al titular inscrito como al tercero de buena fe a quien dicho titular hubiese transmitido determinados derechos económicos).

4. PRÁCTICA DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA

Antes de comenzar el estudio de las diferentes posibilidades que ofrecen las anotaciones preventivas en relación con el Registro de la Propiedad Intelectual, debemos aclarar que el artículo 17 del Reglamento actual establece que «*el procedimiento para practicar la anotación y para su cancelación, así como los plazos de caducidad de las anotaciones preventivas, se regirán por lo establecido en la legislación hipotecaria en cuanto sea compatible*». La completa remisión del Reglamento a la Ley Hipotecaria, superando cualquier aplicación supletoria, demuestra el carácter absolutamente civil de la materia.

Por tanto, debemos remitirnos a lo establecido en los artículos 42 y siguientes de la Ley Hipotecaria (además de otros supuestos de anotación preventiva diseminados por la propia Ley y otras leyes a que reenvía expresamente), así como los artículos 68 y 69 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria. Tal y como se encuentra redactado el primero de los preceptos (42 LH), se trata de un *numerus clausus* que, sin embargo, encierra una gran variedad de anotaciones preventivas.

También debemos señalar que la mencionada remisión no resulta en absoluto afortunada, por cuanto el legislador ha olvidado que la legislación de prenda sin desplazamiento e hipoteca mobiliaria admite esta última sobre la

propiedad intelectual y determina los Registros competentes para la práctica de su inscripción. Quizá solamente hacía falta reformar algunas frases del Reglamento que rige la Ley de Hipoteca Mobiliaria, o incluso reformar el propio Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual, estableciendo unas anotaciones preventivas propios de la materia de Derecho de autor, indicando el contenido y procedimiento para su práctica, suspensión y cancelación.

5. LOS SUPUESTOS DE ANOTACIÓN PREVENTIVA ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO 2003

Según se establece en el párrafo primero del artículo 16 del Reglamento de 2003, «*podrán pedir anotación preventiva de su derecho*» las personas citadas en su texto, así como en los casos expresamente recogidos, siguiendo la misma regulación de *numerus clausus* que la Ley Hipotecaria, más si tenemos en cuenta que este artículo 16 es un calco del artículo 42 LH con alguna variación o matiz para adaptarlo a la regulación propia de la propiedad intelectual. De ahí el sentido de la remisión antes comentada del artículo 17.

Para el estudio de los diferentes supuestos dividiremos los distintos supuestos del repetido artículo 16 en los siguientes apartados, recogiendo todo aquello que resulte aplicable por el Registrador Territorial a la hora de llevar a cabo la práctica de una anotación preventiva:

A) *Anotaciones representativas de otro asiento*

Se trata de inscripciones provisionales, con efectos similares a los de una inscripción definitiva, pero limitadas temporalmente. A ellas se refiere el artículo 42.9.º LH, según el cual puede pedir anotación preventiva de su derecho:

- a) El que presente algún título cuya inscripción no pueda acometerse por faltar en el título presentado algún requisito subsanable.
- b) Por imposibilidad del Registrador, por ejemplo, al tener que llevar a cabo un profundo estudio de la documentación presentada.

Dentro de este apartado de anotaciones por imposibilidad del Registrador, tenemos como aplicables las siguientes:

— por falta de índices (10);

(10) Artículo 161 RH: «Siempre que por circunstancias extraordinarias no existan índices en un Registro y se solicite una inscripción que requiera la consulta de aquéllos, se tomará anotación preventiva que subsistirá, no obstante lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley, hasta que pueda cancelarse o convertirse en inscripción».

- por presentación simultánea de títulos contradictorios (11);
- por tener que consultarse alguna duda que impida de momento la inscripción solicitada (12);
- por reconstrucción de asientos destruidos: a ello se refiere el artículo 238 LH, según el cual se aplicarán las Leyes de 15 de agosto de 1873 y 5 de julio de 1938.

El artículo 3.º de la Ley de 1873 señala el plazo de un año para la rehabilitación de asientos presentando nuevamente los documentos, mientras que su artículo 14 deja en suspenso la eficacia de los asientos anteriormente registrados. La Ley de 1938 completa la anterior, señalando la posibilidad de reinscripción por medio de acta de notoriedad (art. 4.º), así como la posibilidad de una prórroga del plazo concedido que no podrá exceder de otro año más (art. 12.º).

- c) Por inicio por parte del Registrador del procedimiento de rectificación de errores que se observe en algún asiento ya practicado en la forma que reglamentariamente se determine.

La posibilidad de rectificación de errores por parte del Registrador se recoge en el artículo 29 del Reglamento de 2003, el cual indica que *«el registro podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común»* (13).

- d) Por tratarse de la anotación de un legado específico de la obra o derechos propios del autor o titular correspondiente. No teniendo

(11) Artículo 422 RH: «En el supuesto de que el asiento comenzado no pudiera terminarse en breve plazo por haber de referirse a muchas fincas, se interrumpirá, y en vez de la diligencia de cierre se pondrá a continuación de la última palabra una nota de quedar en suspenso la conclusión del asiento, expresándose además en ella, si hubiere algunos títulos pendientes de presentación, el número de los presentados en conjunto, el de los asientos extendidos y el de los que quedaron por extender».

(12) Artículo 481 RH: «Siempre que el Registrador consultare, conforme al artículo 273 de la Ley, alguna duda que impida practicar cualquier asiento, extenderá la anotación preventiva con arreglo al número noveno del artículo 42 de la misma, que subsistirá hasta que se notifique al Registrador la resolución de la consulta. Por esta anotación no se devengarán honorarios».

(13) Artículo 105 de la Ley 30/1992: «1. Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos, expresos o presuntos, no declarativos de derechos y los de gravamen, siempre que tal revocación no sea contraria al ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos».

todavía la posesión de la obra o el disfrute de los derechos, y estando afectos a la posible responsabilidad de la masa hereditaria, dicho legado no constituye, por el momento, título bastante para inscribirlo, necesitando el Registrador la escritura de entrega del mismo. Hasta que se produzca la presentación de dicha escritura, se tomará anotación preventiva de la obra o derechos objeto del legado (aplicando por analogía el art. 47 LH).

Las consecuencias de este tipo de anotaciones son las siguientes:

- a) Los derechos anotados preventivamente se pueden enajenar como si estuvieran correctamente inscritos y el adquirente puede solicitar también anotación preventiva de su derecho.
- b) La anotación provoca el cierre del Registro, impidiendo la entrada de cualquier otro título contradictorio, es decir, el mismo efecto que produce cualquier inscripción.
- c) Dichas anotaciones son convertibles en el asiento al que sustituyen, transformándose en el mismo una vez subsanado el defecto o desaparecido el obstáculo que impedía la inscripción.

No podemos olvidarnos en este apartado de la anotación de incoación de expediente de dominio con el fin de restaurar el tracto sucesivo interrumpido, con la documentación exigida en el artículo 274 RH (14). Los efectos de tal anotación en el Registro serán los siguientes:

(14) Artículo 274 RH: «El escrito a que se refiere la regla segunda del artículo 201 de la Ley, cuando tenga por objeto la inmatriculación de fincas, estará suscrito por los interesados o sus representantes, y contendrá:

- 1.º La descripción del inmueble o inmuebles de que se trate, con expresión de los derechos reales constituidos sobre los mismos.
- 2.º Reseña del título o manifestación de carecer del mismo y, en todo caso, fecha y causa de la adquisición de los bienes.
- 3.º Determinación de la persona de quien procedan éstos y su domicilio, si fuere conocido.
- 4.º Relación de las pruebas con que pueda acreditarse la referida adquisición y expresión de los nombres, apellidos y domicilio de los testigos, si se ofreciere la testifical.
- 5.º Nombre, apellidos y domicilio de las personas a cuyo favor estén catastrados o amillarados los bienes.
- 6.º Nombre, apellidos y domicilio de los dueños de las fincas colindantes, de los titulares de cualquier derecho real constituido sobre las que se pretenda inscribir, del poseedor de hecho de la finca, si fuere rústica, y del portero o, en su defecto, de los inquilinos, si fuere urbana.

El iniciador del expediente podrá solicitar en el mismo escrito que se libre mandamiento para la extensión de la anotación preventiva de haberse incoado el procedimiento».

Donde dice «finca» o «inmueble» debemos entender, lógicamente, para lo que nos interesa «obra intelectual» o «derecho de propiedad intelectual».

- una vez justificado el dominio (en este caso autoría o propiedad de la obra o titularidad de los derechos de propiedad intelectual), para que la inscripción del mismo pueda practicarse en el Registro de la Propiedad Intelectual resulta imprescindible testimonio judicial bastante en que conste ser firme el Auto, el cual se insertará literalmente;
- en caso de haberse realizado la mencionada anotación preventiva de iniciación del procedimiento judicial de dominio, dicha anotación se convierte en inscripción definitiva (art. 283 RH).

La aplicación del párrafo 9.º del artículo 42 LH viene apoyada en la letra g) del artículo 16 del Reglamento de 2003, pues según la misma puede solicitar anotación preventiva *«el que en cualquier otro caso tuviese derecho a exigirla conforme a lo dispuesto en las leyes»*.

B) *Anotaciones de derechos en litigio o en formación*

1. Anotaciones de demanda

Tiene lugar cuando se reclama la propiedad de la obra o algún derecho sobre la misma. Se refieren a esta anotación los siguientes apartados del artículo 16 del Reglamento de 2003:

- a) El que obtenga a su favor mandamiento judicial ordenando la anotación preventiva de demanda sobre la titularidad de derechos inscribibles.
- e) El que acredite la presentación de la demanda con objeto de impugnar la denegación registral de la inscripción de un derecho de propiedad intelectual.

Con la anotación, cualquier adquirente queda enterado de la existencia de un pleito pendiente, quedando sometido al resultado final del mismo, sin poder alegar su buena fe a la hora de presentar su título. Para que la anotación de demanda pueda llevarse a cabo debe cumplir una serie de requisitos:

- la anotación preventiva sólo puede recaer sobre las obras o derechos que, siendo objeto de la acción, aparezcan inscritos o anotados a nombre del demandado. Si la obra o derechos aparecen inscritos o anotados a nombre de persona distinta se denegará la anotación (15);

(15) En sede registral inmobiliaria la cuestión no admite duda, y así debe aplicarse en sede registral de propiedad intelectual. Por ejemplo, la RDGRN de 29 de octubre de 1968, según la cual no es anotable la demanda reivindicando la finca de sus actuales titulares cuando en el Registro figura todavía dicha finca a nombre del transmitente.

- la única manera de conseguir la práctica de la anotación preventiva en estos casos es el dictado de una providencia por parte del juez, a instancia de parte y siempre en virtud de documento bastante [esto último siempre al prudente arbitrio del juez (16)];
- el demandante solicitante de la anotación debe ofrecer una indemnización por los perjuicios que puedan seguirse al demandado en caso de resultar absuelto, estableciendo el juez la caución que estime suficiente a tal efecto;
- si la demanda prospera (es decir, se concede la petición del demandante a través de una sentencia en todo caso firme) se practicarán las inscripciones o cancelaciones ordenadas por el cuerpo de la sentencia (art. 198.1 RH).

2. Anotaciones de sentencias favorables

Los efectos de una sentencia favorable para el anotante supone la rectificación del asiento del Registro favorable al demandado, así como todos los posteriores que traigan causa del mismo; o bien la confirmación y convalidación del asiento del demandante si es que ya existía con anterioridad a la presentación de la demanda; o bien, la extensión de un asiento nuevo a favor del demandante sobre la base de lo establecido en la sentencia.

La demanda de cumplimiento de una obligación de transmisión de la propiedad de una obra o cualquier derecho económico de propiedad intelectual, dará lugar a una inscripción derivada de la del demandado, según la escritura o documento privado otorgado como consecuencia del cumplimiento de la sentencia.

3. Anotación de sentencia ejecutoria

Al respecto, la letra *c)* del artículo 16 del Reglamento permite la anotación preventiva para quien obtuviera sentencia ejecutoria que pueda hacerse efectiva sobre derechos de propiedad intelectual. Dicha sentencia ejecutoria o el mandamiento judicial será título bastante no sólo para practicar la inscripción correspondiente sino también para cancelar los asientos posteriores a la anotación de demanda, que sean contradictorios o limitativos del derecho que se inscriba, extendidos en virtud de títulos de fecha posterior a la de la

(16) El artículo 727.5.ª LEC regula actualmente la anotación de demanda como una medida cautelar, decretada mediante Auto según el artículo 735 LEC, y en virtud de prestación de caución, cuya idoneidad debe ser apreciada por el juez en virtud de providencia, conforme al artículo 737 LEC.

anotación y que no se deriven de asientos que gocen de prelación sobre el de la misma anotación (art. 198.2 RH).

Esta anotación no se verificará hasta que, para la ejecución de la sentencia, se mande embargar la obra o derechos del condenado por ésta en la forma prevista para el juicio ejecutivo en la Ley de Enjuiciamiento Civil (en relación con ello, el art. 701 LEC, referido a la entrega de cosa mueble determinada).

C) *Anotaciones con función de garantía*

Anotación de embargo

La letra *b)* del artículo 16 del Reglamento establece la posibilidad de la anotación preventiva para quien obtuviera a su favor un mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en derechos de propiedad intelectual del deudor, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (es decir, debe tenerse en cuenta si existe alguna hipoteca constituida sobre derechos de explotación: arts. 45 a 51 de la referida Ley). Se trata de una «anotación de garantía» cuyo objetivo se basa en el aseguramiento de la realización de un derecho de crédito, sujetando a la misma con eficacia *erga omnes* determinadas obras o derechos de propiedad intelectual del autor (17).

Cuando se trata de juicio ejecutivo, será obligatoria la anotación, según lo dispuesto en el artículo 1.453 LEC. Dicha obligatoriedad resulta necesaria para que el embargo tenga efectos frente a terceros, conforme al artículo 587.2 LEC, y surta los efectos de preferencia de los artículos 1924.3.º y 1927.2.º del Código Civil.

No resulta muy afortunada la inclusión de la anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad Intelectual. Si observamos la Ley de Hipoteca Mobiliaria, sus artículos 68 y 69 atribuyen la competencia para anotar los mandamientos judiciales de embargo y los de su cancelación sobre bienes susceptibles de gravamen hipotecario (por ejemplo, los derechos de explotación de propiedad intelectual de una obra) al Registro de la Propiedad de Madrid que determine el Ministerio de Justicia: en su momento se fijó el número 4. La consecuencia inmediata es que diferentes organismos tienen atribuida la misma competencia (Registro de la Propiedad Inmobiliaria y

(17) Ahora bien, la obligatoriedad de la anotación del embargo no determina la invalidez del embargo mismo no anotado. La anotación del embargo no es obligatoria a los efectos procesales de continuación del proceso, tal y como se deriva de los artículos 664 y 665 LEC, pero resulta «obligatoria» para que afecte a terceros conforme al artículo 587.2 LEC y tenga los efectos de preferencia de los artículos 1924.3 y 1927.2 del Código Civil.

Registro de la Propiedad Intelectual) a través de normas de diferente rango jerárquico (el primero mediante Ley y el segundo mediante Real Decreto), sin que exista una coordinación previa entre los mismos, por lo menos en lo que se refiere a las anotaciones de embargo.

El problema que se plantea es el siguiente: sobre los derechos de explotación de una obra determinada, figurando inscritos en el Registro General de Propiedad Intelectual, se constituye una hipoteca, siendo inscrita en el mencionado Registro de la Propiedad, número 4 de Madrid, pero no se practica en el citado Registro General la anotación a que se refiere el artículo 76 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria. Posteriormente, el Registrador de la Propiedad Intelectual recibe un mandamiento judicial para que, sobre tales derechos de explotación, practique una anotación de embargo y certifique las cargas inscritas que afectan a los mismos, resultando negativa la certificación solicitada y que por tanto se ejecute el embargo, perjudicando de esta manera claramente al acreedor hipotecario (18).

Otra cuestión de interés se refiere a las posibles ventas sobre la obra o transmisiones de derechos. Partiendo de que el embargo traba la obra o derecho desde el momento mismo de la anotación, afectando a cualquier enajenación, venta o transmisión realizada con posterioridad a la misma, sin embargo no afecta a las realizadas con anterioridad, siendo preferentes y liberando a la obra o derecho de la acción del anotante, aunque se lleven al Registro en una época posterior a la de la anotación.

En cuanto al procedimiento, la anotación se practicará siempre mediante mandamiento expedido por el juez o tribunal en cuyo término jurisdiccional radique el Registro Territorial correspondiente.

D) *Anotaciones de valor negativo*

Entre ellas podemos encontrarnos las anotaciones de demanda de incapacidad, las de prohibiciones judiciales o administrativas de enajenar y las de secuestro:

- a) La anotación de demanda de incapacidad tiene por objeto invalidar, en su caso, las ulteriores transmisiones realizadas sobre los bienes propiedad del incapacitado.
- b) Las anotaciones de prohibiciones judiciales o administrativas de enajenar y las de secuestro tienen como único efecto impedir la inscripción o la anotación de los actos dispositivos que con respecto a la obra

(18) Este problema se destaca expresamente por Pilar RODRÍGUEZ-TOQUERO Y RAMOS en «Protección administrativa: el Registro de la Propiedad Intelectual», en *RCDI*, septiembre-octubre, núm. 636, 1996, págs. 1744 y 1745.

o derecho de propiedad intelectual sobre la que haya recaído la anotación hubiese realizado posteriormente a ésta su titular. Vienen recogidas en la letra *d*) del artículo 16 del Reglamento, según el cual podrá practicarla quien, demandando en juicio ordinario el cumplimiento de cualquier obligación, obtuviera resolución judicial ordenando el secuestro o prohibiendo la transmisión del derecho controvertido.

E) Anotaciones referentes a derechos sucesorios

Al respecto, se permite la anotación preventiva en el Registro a: *f*) Los herederos respecto de su derecho sucesorio cuando no se haga especial adjudicación entre ellos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de éstos.

El derecho hereditario, cuando no exista especial adjudicación a los herederos de bienes concretos, sólo puede ser objeto de anotación preventiva, como no podía ser otra cosa, dada su situación de indivisión temporal. Dicha anotación preventiva sólo puede ser solicitada por cualquier persona que tenga derecho a la herencia o acredite un interés legítimo en el derecho que se pretende anotar.

En caso de que la anotación sea solicitada por los herederos, legitimarios o personas con derecho a promover el juicio de testamentaría (herederos, legitimarios, legatarios de parte alícuota y acreedores de la herencia cuyos créditos no estén garantizados especialmente o afianzados por los herederos, siempre que justifiquen su crédito mediante escritura pública), se realizará mediante solicitud, acompañando el testamento en que aparezcan con tal condición. Si no aparecen designados individualmente en el testamento, deberán presentar este título y cualquier documento que pruebe de alguna manera la presunta cesión o transmisión (en todo caso, la declaración de herederos *ab intestato*, hasta que se resuelva la cuestión del reparto de la masa hereditaria), ya sea público o privado.

Si no se trata de ninguna de las personas citadas en el párrafo anterior, se practicará mediante providencia judicial obtenida según los trámites previstos en el artículo 57 LH (19). El mencionado derecho hereditario así anotado podrá transmitirse, gravarse y, por tanto, ser objeto de otra anotación en el propio Registro.

(19) En ese caso, acudirá el interesado al juez competente exponiendo su derecho, presentando los títulos en que se funde y señalando los bienes que pretende anotar (aquí serían las obras o derechos de propiedad intelectual). El juez, una vez oídos a los interesados en juicio verbal, dictará providencia accediendo o no a la pretensión y señalando los bienes o derechos a anotar, librando mandamiento al Registrador, insertándose en el Registro literalmente para que practique su ejecución.

El legatario de bienes muebles podrá pedir en cualquier tiempo anotación preventiva de su derecho. La anotación sólo podrá practicarse sobre los mismos bienes objeto del legado.

El legatario de género o cantidad puede solicitar la anotación preventiva de su valor, dentro de los 180 días siguientes a la muerte del testador, sobre cualquier obra o derecho de explotación inscrito, bastante para cubrirlo, siempre que no hubiesen sido ya legados a otras personas (20).

1. Si el legatario deja pasar el plazo

El legatario que no lo fuere de especie y dejare transcurrir el plazo señalado en el artículo 48 sin hacer uso de su derecho, sólo podrá exigir después la anotación preventiva sobre los bienes de la herencia que subsistan en poder del heredero; pero no surtirá efecto contra el que antes haya adquirido o inscrito algún derecho sobre los bienes hereditarios.

El legatario que, transcurridos los ciento ochenta días, pidiese anotación sobre los bienes hereditarios que subsistan en poder del heredero, no obtendrá por ello preferencia alguna sobre los demás legatarios que omitan esta formalidad, ni logrará otra ventaja que la de ser antepuesto para el cobro de su legado a cualquier acreedor del heredero que con posterioridad adquiriera algún derecho sobre los bienes anotados.

La anotación pedida fuera de término podrá hacerse sobre bienes anotados dentro de él a favor de otro legatario, siempre que subsistan en poder del heredero; pero el legatario que la obtuviere no cobrará su legado sino en cuanto alcanzare el importe de los bienes, después de satisfechos los que dentro del término hicieron su anotación.

La anotación preventiva de legados podrá hacerse por convenio entre las partes o por mandato judicial, presentando al efecto en el Registro el título en que se funde el derecho del legatario.

(20) Artículo 50 LH: «El legatario que obtuviere anotación preventiva, será preferido a los acreedores del heredero que haya aceptado la herencia sin beneficio de inventario y a cualquier otro que, con posterioridad a dicha anotación, adquiriera algún derecho sobre los bienes anotados; pero entendiéndose que esta preferencia es solamente en cuanto al importe de dichos bienes».

Artículo 51 LH: «La anotación preventiva dará preferencia, en cuanto al importe de los bienes anotados, a los legatarios que hayan hecho uso de su derecho dentro de los ciento ochenta días señalados en el artículo 48, sobre los que no lo hicieron del suyo en el mismo término.

Los que dentro de éste la hayan realizado, no tendrán preferencia entre sí, sin perjuicio de la que corresponda al legatario de especie o a cualquier otro, respecto de los demás, con arreglo a la legislación civil, tanto en ese caso como en el de no haber pedido su anotación».

Cuando hubiere de hacerse la anotación de legados o de derecho hereditario por mandato judicial, acudirá el interesado al Juez o Tribunal competente exponiendo su derecho, presentando los títulos en que se funde y señalando los bienes que pretenda anotar. El Juez o Tribunal, oyendo a los interesados en juicio verbal, dictará providencia, bien denegando la pretensión o bien accediendo a ella.

En este último caso señalará los bienes que hayan de ser anotados y librará el correspondiente mandamiento al Registrador, con inserción literal de lo proveniente para que lo ejecute.

6. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS EN EL TÍTULO

Si el título tuviere alguna falta subsanable, el Registrador suspenderá la inscripción y extenderá anotación preventiva cuando la solicite el que presentó el título; y en caso de contener alguna falta insubsanable se denegará la inscripción, sin poder hacerse la anotación preventiva. Para distinguir las faltas subsanables de las insubsanables y extender o no, en su consecuencia, la anotación preventiva a que se refiere este artículo, atenderá el Registrador tanto al contenido como a las formas y solemnidades del título y a los asientos del Registro con él relacionados.

7. RECURSO CONTRA LA CALIFICACIÓN DEL REGISTRADOR

Los interesados podrán reclamar contra el acuerdo de calificación del Registrador, por el cual suspende o deniega el asiento solicitado. Cuando se hubiere denegado la inscripción y el interesado, dentro de los sesenta días siguientes al de la fecha del asiento de presentación, propusiera demanda ante los Tribunales de Justicia para que se declare la validez del título, podrá pedirse anotación preventiva de la demanda, y la que se practique se retrotraerá a la fecha del asiento de presentación. Después de dicho término no surtirá efecto la anotación preventiva de la demanda, sino desde su fecha. En el caso de recurrirse gubernativamente contra la calificación del título, todos los términos expresados en los dos párrafos anteriores quedarán en suspenso desde el día en que se interponga el recurso hasta el de su resolución definitiva.

En el caso de hacerse la anotación por no poderse practicar la inscripción por falta de algún requisito subsanable, podrá exigir el interesado que el Registrador le dé copia de dicha anotación, autorizada con su firma, en la cual conste si hay o no pendientes de registro algunos otros títulos relativos al mismo inmueble y cuáles sean éstos, en su caso. El que pudiendo pedir la anotación preventiva de un derecho, dejase de hacerlo dentro de término señalado al efec-

to, no podrá después inscribirlo o anotarlo a su favor en perjuicio de tercero que haya inscrito el mismo derecho, adquiriéndolo de persona que aparezca en el Registro con facultad de transmitirlo.

8. CONVERSIÓN DE LA ANOTACIÓN EN INSCRIPCIÓN

Cuando la anotación preventiva de un derecho se convierta en inscripción definitiva del mismo, surtirá ésta su efecto desde la fecha de la anotación. Las obras o derechos de explotación podrán ser enajenados o gravados, sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación.

9. CONTENIDO DE LAS ANOTACIONES

Las anotaciones preventivas contendrán las circunstancias que se exigen para las inscripciones en cuanto resulten de los títulos o documentos presentados para exigir las mismas anotaciones.

Las que deban su origen a providencia de embargo o secuestro expresarán la causa que haya dado lugar a ello y el importe de la obligación que los hubiere originado.

Todo mandamiento judicial, disponiendo hacer una anotación preventiva, expresará las circunstancias que deba ésta contener, según lo prevenido en el artículo anterior, si resultasen de los títulos y documentos que se hayan tenido a la vista para dictar la providencia de anotación.

Cuando la anotación deba comprender todas las obras o derechos de una persona, como en los casos de incapacidad y otros análogos, el Registrador anotará todos los que se hallen inscritos a su favor. También podrán anotarse en este caso los bienes no inscritos, siempre que el Juez o el Tribunal lo ordene y se haga previamente su inscripción a favor de la persona gravada por dicha anotación.

Si los títulos o documentos en cuya virtud se pida judicial o extrajudicialmente, la anotación preventiva no contuvieren las circunstancias que ésta necesite para su validez, se consignarán dichas circunstancias por los interesados en el escrito en que, de común acuerdo, soliciten la anotación. No habiendo avenencia, el que solicite la anotación consignará en el escrito en que la pida dichas circunstancias, y, previa audiencia del otro interesado sobre su exactitud, el Juez o Tribunal decidirá lo que proceda.

10. NULIDAD DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA

La anotación preventiva será nula cuando por ella no pueda venirse en conocimiento de la finca o derecho anotado, de la persona a quien afecte la anotación o de la fecha de ésta.

Si el heredero quisiere inscribir a su favor los bienes de la herencia o anotar su derecho hereditario dentro del expresado plazo de los ciento ochenta días, y no hubiere para ello impedimento legal, podrá hacerlo, con tal de que renuncien previamente y en escritura pública todos los legatarios a su derecho de anotación, o que en defecto de renuncia expresa se les notifique judicialmente, con treinta días de anticipación, la solicitud del heredero, a fin de que durante dicho término puedan hacer uso de aquel derecho.

Si alguno de los legatarios no fuere persona cierta, el Juez o Tribunal mandará hacer la anotación preventiva de su legado, bien a instancia del mismo heredero o de otro interesado, bien de oficio.

El heredero que solicitare la inscripción a su favor de los bienes de la herencia dentro de los referidos ciento ochenta días, podrá anotar preventivamente, desde luego, dicha solicitud.

Esta anotación no se convertirá en inscripción definitiva hasta que los legatarios hayan obtenido o renunciado la anotación de sus legados o haya transcurrido el plazo de los ciento ochenta días.

11. CANCELACIÓN DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA

El Registro de la Propiedad Intelectual dispone de un plazo de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud de inscripción o anotación preventiva, sin tener en cuenta los plazos necesarios para la subsanación, la resolución de conflictos entre solicitudes de inscripción incompatibles y la reanudación del tracto sucesivo.

En la legislación anterior, concretamente el Reglamento de 1993, la solicitud se entendía desestimada por el transcurso del tiempo fijado (tres meses), es decir, el «silencio negativo», mientras que el artículo 24.1 del Reglamento actual se refiere de manera expresa en este supuesto al artículo 42 de la Ley 30/1992, el cual impone al Registro la obligación de resolver acerca de la solicitud de manera expresa, ya sea en sentido positivo o negativo (21).

(21) Artículo 24 del Reglamento de 2003: *«En el plazo máximo de seis meses contados desde la fecha en que las solicitudes hayan tenido entrada en el Registro Territorial competente para resolver, el titular del registro las resolverá de forma expresa acordando practicar o denegar la inscripción y notificándolas a los interesados, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».*

Dicho artículo resulta asimismo aplicable en diferentes aspectos atinentes a la inscripción, como los referentes a prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, plazo máximo de notificación (que coincide con el establecido por el actual Reglamento), aspectos formales de publicación del procedimiento, casos de suspensión de la resolución sobre la solicitud de inscripción o anotación preventiva, cumplimiento del plazo de resolución y responsabilidad por parte del personal del Registro en la emisión de dicha resolución.

Artículo 42 de la Ley 30/1992: «1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptúan de la obligación, a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración.

2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

- a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de acuerdo de iniciación.
- b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud haya sido recibida por el órgano competente.

5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:

- a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la presente Ley.
- b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de las Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá

En caso de transcurso del plazo para resolver acerca de la solicitud, sin que tenga lugar tal resolución, el interesado dispone de una doble posibilidad, como consecuencia de la remisión a la Ley 30/1992:

- presentar un recurso contra la falta de resolución expresa, de acuerdo con la obligación impuesta por el artículo 24 del Reglamento de 2003, con remisión al artículo 42 de la Ley 30/1992;
- presentar un recurso contra la denegación por silencio: tal recurso puede encontrarse también incluido en el presentado contra la falta de resolución expresa de manera subsidiaria. De esta manera se evitan los inconvenientes derivados de una diferencia de criterio del órgano que resuelva el recurso acerca del contenido y significado del silencio administrativo en el caso concreto.

La resolución emitida por el Registro debe ser motivada en caso de denegación, cuando sea favorable pero exista oposición de partes interesadas

de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.

- c) *Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.*
- d) *Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimientes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.*
- e) *Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 88 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.*

6. *Cuando el número de las solicitudes formuladas a las personas afectadas pudiera suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitarse los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.*

Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles.

De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente».

que hayan comparecido en el procedimiento, y cuando existan dudas sobre la compatibilidad de la concreta solicitud con otras solicitudes o inscripciones (cuyo procedimiento se recoge en el art. 20 del Reglamento de 2003) (22).

Las vías de impugnación vienen expresamente recogidas en el artículo 25 del Reglamento de 2003. El contenido del mismo se desarrolla del siguiente modo:

1. Son recurribles, en vía administrativa, las resoluciones y los actos de trámite con fundamento en la aplicación de normas de procedimiento administrativo, según los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992 (23).

(22) Artículo 20 del Reglamento de 2003: *«Si se advirtiese que han sido presentadas dos o más solicitudes incompatibles referidas a derechos sobre una misma obra, actuación o producción, se comunicará tal circunstancia a los interesados, para que en el plazo de 15 días hábiles manifiesten lo que convenga a su derecho y aporten las pruebas y documentos que estimen oportunos. A la vista de las alegaciones presentadas y de la legalidad de los actos y contratos relativos a los derechos inscribibles, el registrador resolverá lo que mejor proceda en derecho.*

2. *Cuando la incompatibilidad se advierta entre una inscripción ya practicada y una solicitud de inscripción, ésta será denegada de conformidad con lo establecido en el artículo 27, excepto cuando proceda una rectificación de los asientos, en cuyo caso se estará a lo que disponga la resolución judicial correspondiente».*

(23) Artículo 107. Objeto y clases:

1. *Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley. La oposición a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.*

2. *Las Leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respecto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.*

En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado.

La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley.

3. *Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.*

4. *Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica.*

El recurso se interpone ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (art. 25.2 del Reglamento de 2003).

2. Son recurribles, en vía judicial (ante la jurisdicción civil), sin necesidad de reclamación administrativa previa, los acuerdos que, en parte o en todo, versen sobre la validez o invalidez de los títulos, la capacidad de las partes, la existencia o inexistencia de los derechos inscribibles o sobre cualquier otra cuestión de naturaleza privada (art. 25.3 del Reglamento de 2003).

Artículo 108. Recurso extraordinario de revisión:

Contra los actos firmes en vía administrativa sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 118.1.

Artículo 109. Fin de la vía administrativa:

Ponen fin a la vía administrativa:

- a) *Las resoluciones de los recursos de alzada.*
- b) *Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2.*
- c) *Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.*
- d) *Las demás resoluciones de órganos administrativos, cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.*
- e) *Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.*

Artículo 110. Interposición de recurso:

1. *La interposición del recurso deberá expresar:*
 - a) *El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.*
 - b) *El acto que se recurre y la razón de su impugnación.*
 - c) *Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio, y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.*
 - d) *Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.*
 - e) *Las demás particularidades exigidas en su caso por las disposiciones específicas.*
2. *El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.*
3. *Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.*

Artículo 111. Suspensión de la ejecución:

1. *La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.*
2. *No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien compete resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto recurrido, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:*

De acuerdo con el artículo 25.1 del Reglamento de 2003, se pueden ejercer ante la jurisdicción civil, «*las acciones procedentes de conformidad con lo establecido en el artículo 145.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual*». El hecho de mencionar a dichas «acciones civiles», diferen-

-
- a) *Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.*
 - b) *Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley.*

3. *La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto. En estos casos no será de aplicación lo establecido en el artículo 42.4, segundo párrafo, de esta Ley.*

4. *Al dictar acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución impugnada.*

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación y caución o garantía suficiente para responder de ellos en los términos establecidos reglamentariamente.

La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.

5. *Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.*

Artículo 112. Audiencia de los interesados:

1. *Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho.*

2. *Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.*

3. *El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.*

Artículo 113. Resolución:

1. *La resolución del recurso estimará, en todo o en parte, o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.*

2. *Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido salvo lo dispuesto en el artículo 67.*

3. *El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oírán previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.*

tes de los posibles recursos planteados contra acuerdos del registrador sobre asuntos civiles de fondo, debe referirse a que el ejercicio de tales acciones civiles sobre el derecho puede ser simultáneo a la solicitud judicial de cancelación, modificación o inscripción de los asientos registrales.

Artículo 114. Objeto:

1. *Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúan con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.*

2. *El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.*

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y una copia completa y ordenada del expediente.

El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.

Artículo 115. Plazos:

1. *El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.*

2. *El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurridos este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 43.2, segundo párrafo.*

3. *Contra la resolución de un recurso de alzada, no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 118.1.*

Artículo 116. Objeto y naturaleza:

1. *Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo.*

2. *No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.*

Artículo 117. Plazos:

1. *El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.*

2. *El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.*

3. *Contra la resolución del recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.*

Por otra parte, en cuanto a los tribunales competentes, hemos de entender que, tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003, la competencia judicial recae sobre los Juzgados de lo Mercantil (24), salvo cuando la acción civil verse sobre estado civil, incapacitación, liquidación del régimen económico-matrimonial o una sucesión *mortis causa* en que se encuentren envueltos derechos de propiedad intelectual, puesto que su competencia se refiere a cuestiones de fondo sobre temas relacionados con la propiedad intelectual, y no cualquier asunto de materia civil que confluya con un asunto sobre propiedad intelectual al mismo tiempo.

Artículo 118. Objeto y plazos:

1. *Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurran algunas de las causas siguientes:*

- 1.^a *Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.*
- 2.^a *Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.*
- 3.^a *Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.*
- 4.^a *Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.*

2. *El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.*

3. *Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 102 y 105.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.*

Artículo 119. Resolución:

1. *El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado primero del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.*

2. *El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.*

3. *Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.*

(24) Artículo 86 ter 2.º LEC: *Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:*

Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad intelectual, propiedad industrial y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas».

En todo caso, si convergen ambos tipos de asuntos (puramente civil y de propiedad intelectual) la competencia debería resolverse a favor de los Juzgados de lo Mercantil, por cuanto los aspectos civiles del caso afectan directamente a la salvaguarda y aplicación de los derechos de propiedad intelectual que pretenden inscribirse en el Registro.

El problema que se plantea en cuanto a la redacción del actual Reglamento de 2003 reside en la falta de especificación del procedimiento judicial que debe seguirse a la hora de interponer la acción civil.

Teniendo en cuenta la legislación procesal civil, la solución debería ser la siguiente:

- juicio ordinario: siempre que la acción no verse exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, tramitándose, en este caso, según el tipo de procedimiento que corresponda en función de la cantidad reclamada (art. 249.1.º4.ª LEC).
Se tramitarán, por este tipo de procedimiento, las demandas cuya cuantía exceda de 3.000 €, así como aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de determinar, ni siquiera de modo relativo (249.1.º 2 LEC: por ejemplo, en caso de denegación de inscripción registral cuando dicha denegación se basa en la insuficiencia del título presentado);
- juicio verbal: cuando la acción se base en una reclamación de cantidad inferior a los indicados 3.000 €.

Supuestos de cancelación de las anotaciones preventivas

Los casos en que puede tener lugar la cancelación de la anotación preventiva son los determinados por el artículo 206 RH:

- 1.º Cuando por sentencia firme fuere absuelto el demandado en los casos en que se trate de anotación preventiva de demanda.
- 2.º Cuando en actuaciones de embargo preventivo, juicio ejecutivo, causa criminal o procedimiento de apremio se ordene el alzamiento del embargo, o se enajene o adjudique en pago el derecho anotado.
- 3.º En caso de que se ordene el alzamiento del secuestro o la prohibición de enajenar.
- 4.º Cuando ejecutoriamente fuese desestimada la demanda propuesta, con el fin de obtener providencia sobre incapacidad legal para administrar, la ausencia, el fallecimiento y cualquier otra en virtud de la cual se modifique la capacidad civil de las personas en relación con la libre disposición de sus bienes.
- 5.º Siempre que se desestime o deje sin efecto la declaración de concurso o de quiebra.

- 6.º Cuando en alguno de dichos procedimientos civiles el demandante abandone el pleito, se separe del mismo o se llegue a declarar caducada la instancia.
- 7.º Cuando el legatario cobre su legado.
- 8.º Si hubiese transcurrido un año desde la fecha de la adjudicación para pago de deudas o desde que éstas puedan exigirse, y en cualquier tiempo en que se acredite el pago de las deudas garantizadas.
- 9.º Cuando en el supuesto de derechos hereditarios se presente la escritura de participación y no aparecieren adjudicados al heredero las obras o derechos sobre los que se hubiese tomado anotación preventiva del derecho hereditario.
- 10.º Si la anotación se convierte en inscripción definitiva a favor de la misma persona en cuyo provecho se hubiese aquélla constituido, o de su causahabiente, bien de oficio o a instancia de parte.
- 11.º Si la persona a cuyo favor estuviese constituida la anotación renunciase a la misma o al derecho garantizado.
- 12.º Cuando caduque la anotación por declaración expresa de la Ley, en cuyo caso se hará constar, de oficio o a instancia del titular de la obra o del derecho real afectado, por nota marginal.

Procedimiento de cancelación (25)

La cancelación se practica mediante la presentación del testimonio de la resolución judicial firme o mandamiento donde se ordene la cancelación, escritura pública o documento en el cual quede acreditado el hecho determinante de la misma o, en su caso, mediante solicitud de los interesados.

En los casos de caducidad bastará con la solicitud del dueño del titular del derecho inscrito, ratificada ante el Registrador, suponemos que mediante escrito y con la firma de dicho titular.

Cuando se trate de cancelación de embargos a favor de la Hacienda Pública será título bastante la escritura en la que conste la extinción de dicha anotación o la certificación de adjudicación emitida en los expedientes resueltos mediante la vía de apremio (26).

La cancelación de la anotación preventiva puede practicarse mediante nota marginal o bien otra anotación en el cuerpo de la inscripción.

(25) Artículo 207 RH.

(26) El contenido de dicha certificación viene recogido en el artículo 26 RH.

RESUMEN

PROPIEDAD INTELECTUAL

La actual regulación legal del Registro de la Propiedad Intelectual, según el nuevo Reglamento creado por el Real Decreto 281/2003, plantea diversas cuestiones de interés en relación con las clases, estructura, contenido y ordenación de los asientos que conforman el Registro, sobre todo en relación con los tipos de asientos y notas marginales, no previstos en la actual regulación, por lo que procede la aplicación analógica de la legislación hipotecaria y mercantil. La principal problemática aparece en relación con el modelo de anotaciones preventivas tomado de la legislación hipotecaria y su encaje para la inscripción de obras de propiedad intelectual. El nuevo Reglamento copia casi literalmente la regulación de dichas anotaciones del artículo 42 de la Ley Hipotecaria española, con algunos matices necesarios. También se presentan cuestiones importantes a la hora de inscribir la obra cinematográfica, dado que se trata de una obra en colaboración, debiendo tener en cuenta la inscripción de sus diferentes modalidades de explotación.

ABSTRACT

INTELLECTUAL PROPERTY

The current legal rules of the Intellectual Property Registry as provided by the new Regulation created by the Real Decree 281/2003 raises several interesting questions in relation to the types, structure, content and order of the entries conforming the Registry, especially regarding the types of entries and marginal notes not foreseen in the current regulation, therefore the application by analogy of the mortgage and mercantile legislation becomes appropriate. The principal problem raises regarding the model of restraint orders coming from the mortgage legislation and its application for the inscription of intellectual property works. The new Regulation almost literally copies the regulation of the mentioned restraint orders from the article 42 of the Spanish Mortgage Law, with different necessary shapes. Another important questions also appear when inscribing the cinematographic work, because it is a work created in collaboration, having into account the inscription of its different ways of exploitation.

(Trabajo recibido el 20-05-08 y aceptado para su publicación el 20-03-09)